

Los movimientos sociales en la 4T y la búsqueda de comunidades políticas de pertenencia

JAIME ANTONIO PRECIADO CORONADO*

Los regímenes populistas tienen su base social de apoyo en movimientos electorales que le dan soporte a la democracia política (Modonesi, 2021), pero enfrentan relaciones contradictorias con aquellos movimientos sociales que se proponen radicalizar la democracia en todas sus dimensiones: social, económica, política, cultural, civilizatoria, biopolítica. Si bien el caso de Morena recogió en su pasado reciente cierta articulación entre movimientos sociales contestatarios como la CNTE, movimientos sindicales democratizadores de algunas empresas paraestatales, movimientos sociales urbano-populares, entre otros, con los procesos electorales —sobre todo presidenciales y luego locales—, la estrategia de la llamada cuarta transformación (4T) ha impulsado un movimiento social electoral que se aleja de las acciones colectivas que le dieron sustento y que sirve de filtro para reconocer selectivamente interlocutores/as con capacidad de negociación frente al presidente de la nación, los poderes republicanos y frente a los poderes ejecutivos locales.

Se trata de relaciones contradictorias entre movimientos sociales, partido y gobierno, ya que este último tiende alianzas entre el programa de la 4T y la satisfacción de demandas colectivas que se pueden atender, aunque la operación política gubernamental despliega sus capacidades de negociación política caso por caso, con lo cual se busca impedir que esas demandas se agreguen a una dimensión nacional que pueda ser amenazante para el gobierno federal. En lo que toca a la oposición política de cara a la 4T y los movimientos sociales, esta relación se despliega en el marco de un complejo repertorio: el tema de la reforma electoral y, particularmente, del INE, está provocando una constelación de alianzas entre personas, organismos civiles y partidos políticos opositores al gobierno y Morena, que están luchando como movimiento social electoral por la calle, mientras que se desdibujan algunas agrupaciones que pretendían aglutinar demandas destituyentes de alcance nacional, que cobraban cierta fuerza social entre la oposición religiosa histórica, como es el caso de Frena.

Hay una suerte de interregno entre el movimiento electoral que representa Morena y el poder de negociación que muestra la multiplicidad de acciones colectivas contestatarias y críticas frente al gobierno de la 4T. La influencia de los movimientos sociales sobre el partido gobernante se ha desplazado del ámbito social hacia el campo de lo electoral, en la medida en que Morena se ofrece como mediador de las demandas colectivas a través de la cooptación de liderazgos sociales, principalmente en el caso de los contratos colectivos de trabajo de sindicatos nacionales, como la CFE, Pemex o el Sindicato Minero-Metalúrgico.

* Agradezco la colaboración del maestro Tomás García en la preparación de este escrito, y de la licenciada Esmeralda Gordillo en la sistematización de la información.

Mi hipótesis es que las tensiones políticas que caracterizan a este interregno están en el paso de los movimientos sociales hacia la política y lo político, esto es, hacia un proyecto de poder organizado, que transita por la configuración de comunidades políticas de pertenencia, que interpelan o reconfiguran al estado nacional instituido, en su relación con todas las escalas geopolíticas de su actuación, que van de lo local a lo global.

En la configuración de las comunidades políticas de pertenencia confluyen prácticas instituyentes —aquellas cuyas demandas colectivas no pueden ser procesadas dentro del marco jurídico político institucional— de las que son portadoras los movimientos sociales críticos del estado o del régimen capitalista, en las que se combinan políticas de identidad cultural de base étnica, religiosa, o de género (Fukuyama, 2015). Además, esa capacidad instituyente se encuentra en ciertas políticas de reconocimiento, de reivindicaciones materiales, de clase, que interpelan las esferas de los cuidados y de la solidaridad social, de las políticas públicas y del régimen político (Honneth, 1979). Otra dimensión de tales prácticas instituyentes se aglutina en torno del ideario de pueblo, de una soberanía popular refundada que se traduce en políticas de “pueblos en movimiento” (Zibecchi, 2022) o en diversas prácticas que no están dirigidas al orden gubernamental instituido, aunque lo interpelan, lo que se puede comprender bajo las categorías de Pueblo-Impedimento; Pueblo Plebiscitario y Pueblo Juicioso y Crítico (Rosanvallon, 2007).

Esas comunidades políticas de pertenencia de carácter instituyente actúan en dos planos, frecuentemente divergentes: la lucha desde dentro y contra el estado, lo cual supone su interpelación y cuestionamiento en el ámbito de la democracia política y en todos los órdenes de gobierno, y en la lucha por la supresión del estado, alrededor de la cual emergen movimientos de resistencia frente al poder instituido. Tanto en los movimientos que luchan desde dentro y contra el estado como en los que buscan suprimir al estado, la comunidad política de pertenencia imaginada o pretendida se centra en la autonomía comunitaria.

En la primera parte se identifican los campos de tensión entre los movimientos sociales y el movimiento electoral que representa Morena; en la segunda se describe el interregno entre un poder social antiguo y uno emergente de cara al poder establecido. En la tercera parte se sitúa la búsqueda de comunidad política de pertenencia autónoma y no estado-céntrica. Al final se ofrecen las ideas a profundizar y reflexionar.

APUNTES TEÓRICOS, LAS COMUNIDADES POLÍTICAS DE PERTENENCIA

Desde el enfoque teórico de este trabajo la acción colectiva que incide en el campo de lo político está transitando de los movimientos sociales identitarios o de reivindicaciones materiales, de clase, hacia comunidades políticas de pertenencia de carácter instituyente, que cuestionan la matriz estado-céntrica como referencia central única de pertenencia. Son diversas sus estrategias frente a lo instituido y registran divergencias sobre el énfasis que se otorga al proceso instituyente comunitario. En esos movimientos sociales politizados las luchas de reivindicación se agregan en ensambles sociales complejos mediante tres procesos que están implicados entre sí:

Políticas de identidad, en que la agregación de demandas corresponde a la identificación de una base de intereses colectivos que están vinculados a un origen común que está amenazando lo étnico, lo religioso, la equidad de género, la diversidad sexual, cualquier comunidad de intereses que comparte un sentido de pertenencia intersubjetivo.

Políticas de reconocimiento, que se refieren al ámbito político de la reivindicación en las diversas esferas de la vida colectiva ante conflictos que amenazan las condiciones materiales objetivas de pertenencia a una comunidad política determinada.

Políticas de pueblo, más allá del debate sobre populismos se problematiza la categoría de pueblo como la base sustantiva de la comunidad política de pertenencia, como expresión de totalidad social que sirve de base a la soberanía, que no está reducida a la soberanía nacional y que expresa la lucha por la identidad y el reconocimiento por el interés general. Estas políticas se organizan en ensamblajes sociales complejos:¹ el pueblo impedimento-resistencia; el pueblo plebiscitario; el pueblo juicioso y crítico. Tres modos de ensamblaje social que tienden a articular a la comunidad política de pertenencia instituyente como acción colectiva emancipadora.

Estos actores de comunidades políticas de pertenencia, autónoma y comunitaria pueden ser portadores de prácticas instituyentes emancipadoras frente al régimen de acumulación capitalista, sus fundamentos patriarcales, coloniales y ecodidas. En la acción colectiva organizada se pueden distinguir dos grandes estrategias que son consecuencia de la tensión entre movimientos sociales y la estructuración del campo (geo)político:

- a) Las luchas antisistémicas que se dan desde dentro y contra el estado capitalista, en que se debaten límites, obstáculos y potencialidades de las reformas frente al cambio de régimen político, económico y social. Aquí las estrategias varían entre propuestas antineoliberales y anticapitalistas, entre progresismos e izquierdas que se reclaman vinculadas con movimientos sociales transformadores, algunos de los cuales siguen enfrentando el dilema entre reforma y revolución dentro de sus estrategias organizativas. En estas luchas desde dentro y contra el estado el poder y la conformación de un gobierno de carácter popular, en los distintos órdenes del estado nacional, desempeñan un papel central; de ahí la vigencia del imaginario contractualista y del pacto social que renueva instituciones derivadas de las constituciones políticas nacionales, que son nutridas por procesos instituyentes y con formatos democráticos participativos que incluyen, pero van más allá de los procesos electorales. Incluso, pueden proyectar alianzas que hacen relación con una comunidad política supranacional, como es el caso de la Internacional Progresista.
- b) En su origen, las luchas comunitarias asumen estrategias anticapitalistas, a partir de su apego a una base social conformada por pueblos originarios, afrodescendientes y trabajadores del campo y la ciudad, que se articulan en “pueblos en movimiento”, los cuales enfatizan experiencias locales de lucha y resistencia que buscan crear alternativas sustentadas en ensamblajes comunitarios de pertenencia, pero que trascienden la autarquía localista de la escala comunitaria. En ese camino, se proyecta un imaginario internacionalista que vincula diversas experiencias comunitarias en América latina, como son la del EZLN, del *wallmapu* chileno y argentino, del cauca colombiano, de las comunidades indígenas de Bolivia, Perú, Ecuador, entre otras, y en el mundo destacan la Rojava kurda, la Cooperativa Integral Catalana o los movimientos *Ubuntu*, en África, *Satyagraha* en la India y de la Vía

1. Aquí se retoma el sentido otorgado a la “contrademocracia” por Rosanvallon (2007) dado el potencial refundacional de la democracia en sentido sustantivo: el gobierno del pueblo, aunque su ontología sea diversa y plural: el campo político de lo popular y la pluralidad de las políticas de pueblo.

Campechina a escala del llamado Sur Global. Bello (2021) lo identifica como una metáfora sobre la desigualdad social anclada en coordenadas geográficas.

Tal constitución de poder comunitario sin estado presenta varias interrogantes en torno de la relación con las comunidades políticas de pertenencia instituidas, su posible coexistencia o negación o destrucción intencionada. La interfaz entre las luchas desde dentro y contra el estado *versus* las luchas por suprimir al estado plantea interrogantes sobre las diferencias entre gobierno y estado, entre pueblo y nación, entre la gestión de las agendas globales y locales, así como sobre el campo contradictorio entre procesos electorales, reforma y cambio radical, demandas sociales y demandas comunitarias.

Diversos movimientos sociales confluyen en la formulación de las relativamente novedosas demandas sobre bienes públicos globales relativas al agua y la tierra, a la defensa de la biodiversidad, contra el cambio climático y todas las formas de contaminación. Lo cual plantea diferencias entre la agenda global de los bienes públicos y la agenda local, territorializada, que plantean las demandas sobre los bienes comunitarios. Esas convergencias detonan cuestionamientos antisistémicos relacionados con el régimen de acumulación capitalista, que critican a la “Trinidad del Mal desarrollo” (FMI-BM-OMC) por sus políticas de ajuste y austeridad, que provocan mayor desigualdad social a escala mundial, supranacional, regional y en los estados nacionales, y que también critican los efectos perversos del cambio climático, la dominación patriarcal, la violencia sistémica estructural, el racismo, la violación de derechos humanos. Todo lo cual se acentuó por la pandemia del coronavirus.

Desde los movimientos sociales —revueltas, insurgencias— se cuestiona el patrón extractivista, los consensos neoliberales sobre privatización–desregulación de la potencia pública, la miniaturización del estado, la necropolítica demográfica y ambiental, la narrativa del “Green New Deal” asociada con las reformas liberales del “desarrollo sustentable”, el estado punitivo asociado con el crimen organizado. Todo lo cual configura las agendas geopolíticas en las comunidades políticas de pertenencia.

En el debate sobre la democracia, el autoritarismo y la emergencia neoconservadora se cuestiona especialmente al neoliberalismo que caracteriza al régimen político y al sistema de partidos, que se apoyan en una democracia elitista, procedimentalista, minimalista, cada vez más contaminada por la judicialización de la política. Ante el desencanto y la desconfianza de cara a los regímenes políticos las luchas que contienen los movimientos sociales se vinculan con políticas de ciudadanía, con prácticas comunitaristas y con las luchas por los derechos humanos frente a la desigualdad social, la pobreza, la exclusión racista, la opresión patriarcal y la violencia estructural y de género. Se dan así luchas por el horizonte histórico de sentido sobre valores culturales civilizatorios, derechos y poder de la naturaleza. Lo cual da pie a inéditas prácticas instituyentes que combinan lo global y lo local, así como acentúan el campo de las intersubjetividades en sentidos de pertenencia que no se acotan a lo político, pero que se expresan en comunidades políticas de pertenencia.

CAMPOS DE TENSIÓN ENTRE MOVIMIENTOS SOCIALES Y MORENA COMO MOVIMIENTO ELECTORAL DE LA 4T

Las elecciones presidenciales de 2018 desembocan en un partido político que es la continuación de un movimiento electoral, cada vez más sometido al dictado de la persona más conocida, que es seleccionada por encuestas. Ello funciona como filtro selectivo en la iden-

tificación de interlocutores/as válidos ante la orientación de los procesos electorales que le interesan al presidente de la república.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como movimiento electoral tuvo origen en 2011 (Martínez, 2014). Este movimiento coadyuvó en la operación política previa a la campaña electoral a la presidencia de la república en 2012 bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador,² quien también es su fundador.

El viraje de movimiento electoral a partido político ocurrió en 2014, cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral le otorgó el registro (Martínez, 2014). Así se anunciaba la potencial competitividad electoral de Morena, partido que ha mostrado su capacidad de convocatoria en elecciones locales al gobernar 22 estados al comienzo de 2023.

¿Del partido-movimiento al partido-maquinaría electoral?

La experiencia catártica de Morena de convertirse de un partido-movimiento que intentó articular liderazgos de movimientos sociales a la acción electoral a un partido-maquinaría electoral es singular y abre el debate en tres puntos; 1, la naturaleza político-electoral; 2, la generación de recursos partidistas para obtener la legitimidad instituida, y 3, la legitimidad instituyente que desde lo social está ligada a movimientos de base con distintas agendas.

Una de las explicaciones del cambio hacia un partido-maquinaría electoral son las interacciones sociopolíticas en un contexto neoliberal. En estas interacciones comienza a debatirse la forma de un estado mínimo, así como la ampliación de la brecha entre movimientos sociales, partidos políticos y gobierno de cara a los procesos de democratización y a la exigencia de derechos de ciudadanía. Esta situación detonó cierta dualidad entre una izquierda social y una izquierda política, la primera es más autónoma de cara al estado y la segunda participa más institucionalmente (Otero et al., 2021).

Así comenzará una interpelación al aparato estatal desde lo social. Con actores entre los que se encuentran grupos de la sociedad civil organizada, movimientos sociales y manifestaciones de grupos con diversas agendas que cuestionan los ámbitos de la democracia, la economía y las más diversas esferas de las políticas públicas del gobierno de la 4T. Se puede señalar que Morena está inmersa en esta dualidad: entre proyectar su agenda hacia una “izquierda social” —anidada en los movimientos sociales antineoliberales o anticapitalistas— en los contenidos de un proyecto nacional-popular: nacionalizaciones, fortalecimiento de las capacidades reguladoras del estado en la economía y en la política social, o impulsar una “izquierda electoral” encuadrada en un aparato instituido bajo un contexto democrático.

De acuerdo con Otero et al. (2021) Morena como partido político asumió el cometido de ofrecer un espacio abierto a la presencia de algunos líderes de los movimientos sociales en el gobierno, pero a la par impulsó su cooptación bajo formas estatales o estatistas. A pesar de lo anterior el funcionamiento de la administración pública federal actual no ha podido cooptar del todo a dirigentes de los movimientos sociales que participaban del esquema Partido-Movimiento y, simultáneamente, crecen prácticas instituyentes contra lo instituido

2. Otro de los antecedentes políticos y de organización política ocurrieron previo a la elección de 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador en su cargo como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), enfrentó un proceso de desafuero político, lo que hizo que AMLO obtuviera simpatías y apoyo no solo entre el electorado de la capital sino que también en la escala nacional.

por parte de la “izquierda social”, por lo cual se acentúan nodos conflictivos en la gobernabilidad democrática del país.

Algunos de los nodos problemáticos son la operación política de la Reforma Energética y la tensión medioambiental, derivadas de la continuación del patrón neoextractivista. Es cierto que la operación política de la Reforma Energética concitó el apoyo de fracciones o de sindicatos ligados con las empresas paraestatales que son estratégicas para el proyecto de la 4T, como Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro —liquidada por el gobierno de Calderón, en la que ahora, por gestiones presidenciales directas, se pagan las pensiones no reconocidas a los trabajadores despedidos.

En la proyección de nacionalizar los energéticos los proyectos de la refinería Dos Bocas y la compra de la refinería Deer Park en el estado de Texas, en Estados Unidos, han sido controvertidas por el impacto ambiental y su financiamiento. La refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco inauguró su etapa de “pruebas” el primero de julio de 2022, pero no ha comenzado aún trabajos de producción de combustible (Infobae, 2023).

La situación de la Comisión Federal de Electricidad acentúa aún más el revés institucional y ambiental, ya que no se apuesta a las energías renovables y se continúa con el uso de carbón y combustóleo para la producción de energía eléctrica, lo anterior es incentivado por los cambios para la emisión de certificados por parte de la Comisión Reguladora de Energía (Carrillo, 2022).

El proyecto de nacionalización de litio formó parte del paquete de reformas en materia energética; cabe mencionar que uno de los puntos controvertidos es la explotación de este mineral, ya que se señala que el estado mexicano tiene una capacidad limitada, además, en una situación similar a CFE, abre tensiones con empresas que ya han ganado concesiones, como el caso de Bacanora Lithium, empresa de capital chino (Forbes Staff, 2022).

En la estrategia gubernamental sobre la soberanía energética se cancelan las concesiones mineras durante el mandato de AMLO, se refuerzan las hidroeléctricas como opción de energías limpias y se nacionaliza el litio, política que abrirá la intervención estatal hasta dentro de una década al menos, dada la dependencia tecnológica para su exploración y explotación.

Así, se agudiza el interregno entre el gobierno federal y las prácticas instituyentes, pues las negociaciones caso por caso son privilegiadas por AMLO, sin atender demandas provenientes de la acción colectiva que cuestionan el patrón neoextractivista. Ello se muestra también alrededor de las luchas por recursos cómo el agua y sus distintos usos: urbano, industrial, agropecuario.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha otorgado concesiones de uso del agua con fines industriales, disminuyendo la cantidad de agua para uso público y doméstico. Ante los conflictos relacionados con el agua el ejecutivo federal propuso limitar, desde el inicio de su mandato, la entrega de concesiones para uso industrial y minero, particularmente de la actividad de explotación tipo *fracking* (Olivares & Jiménez, 2022), sin que haya muestras de diálogo con amplias redes que defienden el derecho al agua en el país (Becerril, 2023). Mientras tanto, en el caso del agua, avanzan recomendaciones de diversos organismos multilaterales y de la propia ONU sobre la consideración del agua como bien público global.

La disposición de agua para las áreas metropolitanas del país ha planteado megaproyectos de almacenamiento hídrico que ponen en tensión a pueblos y gobiernos. Tal es el caso de la presa el Zapotillo en Jalisco, que pretendía inundar los pueblos de Temacapulín, Palmarejo y Acasico. Ese proyecto estuvo detenido por más de 10 años y en 2022 se anunció la modificación del proyecto original, de esta forma se concede clausurar o modificar esa represa ante

la demanda organizada de las personas que habitan aquellos poblados, lo anterior convive con un nuevo proyecto que garantizará el abasto de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (Saldaña, 2022).

En el rubro agroalimentario se refuerza la estrategia de soberanía alimentaria mediante los intentos gubernamentales por prohibir el uso del glifosato,³ además de impedir el uso de recursos biogénéticos en el caso del maíz, que limiten el uso de semillas transgénicas. No hay evidencias de que el gobierno de la 4T converja con los movimientos sociales que demandan soberanía alimentaria, como es el caso de “Sin Maíz no hay País”, o con los que se oponen al trato desventajoso de los acuerdos de libre comercio, como es el caso de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio.

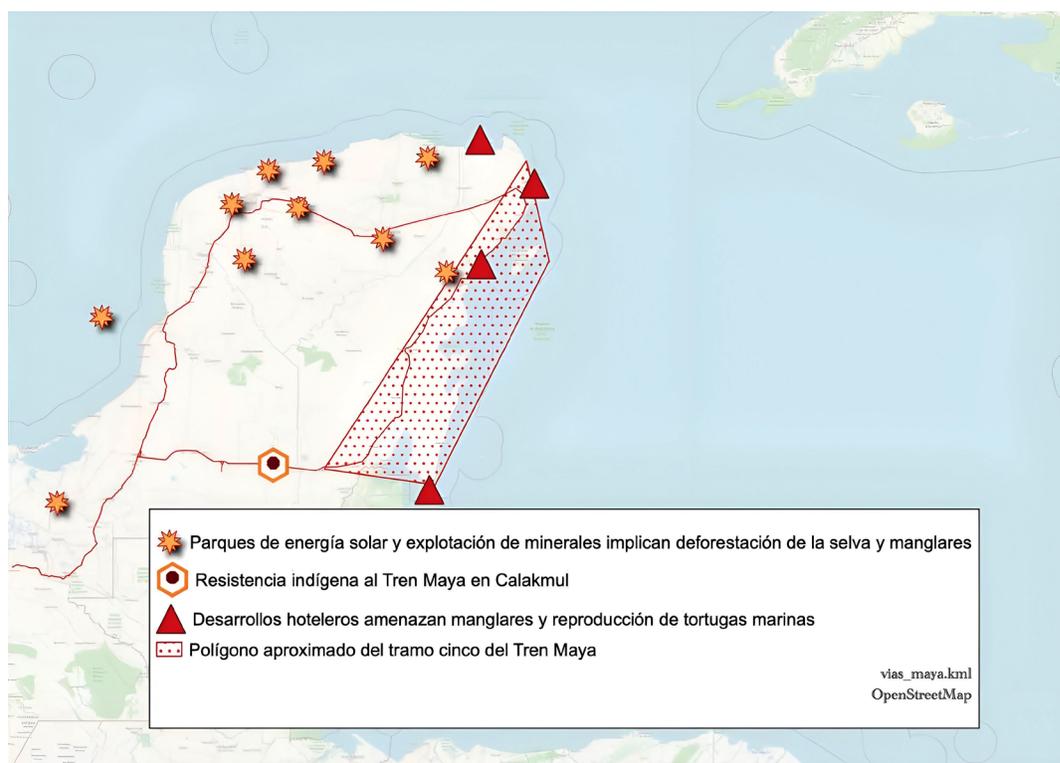
Otro aspecto que la 4T publicita como positivo es el programa Sembrando Vida, en el que la producción campesina aparece como alternativa al *agribusiness*. Aunque esta propuesta en el campo agroforestal se pretende internacionalizar por ser uno de los supuestos remedios contra la falta de desarrollo (como aconteció en una iniciativa ante el Triángulo del Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras), existe inconformidad entre movimientos sociales críticos al neoliberalismo porque el programa Sembrando Vida no fortalece la participación de la población involucrada y porque no deja de estar conectado con el patrón extractivista, sobre todo de productos maderables.

Dentro de este ámbito complejo y contradictorio entre el proyecto nacionalista y soberanista de la 4T los impulsos crecientes del patrón global extractivista, exacerbados por la pandemia del coronavirus y la guerra en Ucrania, el partido-movimiento transformado en partido-maquinaría electoral se enfrenta a la brecha existente entre movimientos sociales instituyentes que transitan hacia comunidades políticas de pertenencia y las prácticas instituidas reproductoras de la comunidad política de pertenencia realmente existente. Algunos campos contradictorios se dan:

- Ante la judicialización de los megaproyectos de la 4T (Insalata & Navarro, 2020) (AIFA, Tren Maya, refinería de Dos Bocas) se cancelan negociaciones con grupos afectados estén o no vinculados con la oposición política, promotora de amparos colectivos contra esas obras (véase la figura 10.1). El caso del Tren Maya es paradigmático sobre los conflictos socioambientales que detona un megaproyecto de esa magnitud, incluidos varios con antecedentes de resistencia en comunidades indígenas, particularmente en la zona arqueológica de Calakmul. También hay conflictos relacionados con proyectos turísticos (cuatro casos) de alta intensidad. Otros conflictos son derivados de explotación de recursos minerales y energéticos (10 casos). Particularmente, el polígono que delimita la zona del tramo 5. Un juez federal entregó suspensión definitiva de este tramo, la cual no se respetó.
- Militarización de la seguridad pública en el combate al crimen organizado (Muñoz, 2022), sin escucha auténtica de grupos y movimientos contra la violencia, la desaparición forzada de personas, el incremento de feminicidios, el asesinato de periodistas. Se desestiman las negociaciones con grupos organizados y movilizados en torno de los derechos humanos, movimientos feministas y de periodistas.

3. El uso de este herbicida está asociado a enfermedades renales e intestinales, y se considera cancerígeno; información disponible en: <https://conacyt.mx/videos/el-glifosato-y-sus-efectos-nocivos-en-la-salud-y-el-ambiente/> Sin embargo, su prohibición en la legislación mexicana fue inhibida a causa de las presiones ejercidas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, en el marco del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) en la reciente Cumbre de Líderes de América del Norte (10 y 11 de enero de 2023).

FIGURA 10.1 MAPA DE CONFLICTOS EN EL ENTORNO DEL TREN MAYA



Fuente: elaboración con datos de EJOLT 2023, software Qgis.

- Ante la tendencia al monopolio de la lucha contra la corrupción, la transparencia y rendición de cuentas se asumen como asuntos de estado y no de la sociedad civil (Mon-siváis, 2019). El gobierno federal es refractario frente al mundo de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que actúan en esos campos de interés público.
- Falta de escucha y diálogo con los organismos de la sociedad civil ante críticas al mercado: la política social se acota a transferencias monetarias que no fortalecen derechos de ciudadanía (Jaramillo, 2022), cuya operación política está a cargo de los “Servidores de la Nación”. En este ámbito no hay movimientos sociopolíticos a escala nacional que impugnen o propongan otra orientación de la política social —lo que sí existe en el plano de grupos académicos como la Red Mexicana de Investigación sobre Política Social, Remipso).
- Predomina una visión de gerencia funcional de la inserción de México al mercado mundial; los cuestionamientos organizados al libre comercio, aunque no siempre están respaldados por movimientos sociales nacionales, no encuentran eco en el gobierno federal. Continúan movimientos “altermundistas” como Mejor sin TLC, o Sin Maíz no hay País, cuyas críticas al T-MEC o a la actualización del tratado con la Unión Europea no encuentran interlocución. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se canceló la oficina encargada de relaciones con organismos de la sociedad civil al inicio del gobierno de AMLO.
- La reforma laboral adaptada a las demandas del T-MEC en torno de la libertad sindical aún no rinde sus frutos. Perseveran los controles sindicales corporativos y la operación

política gubernamental se asume como árbitro de la contienda. Aunque el sindicalismo independiente y de base católica (Frente Auténtico del Trabajo, FAT) dialoga con la secretaria del Trabajo (María Luisa Alcalde hasta julio de 2023), esta oficina no tiene vínculos eficaces con la Secretaría de Economía, donde predomina la voz empresarial.

LA OPOSICIÓN POLÍTICA AL GOBIERNO DE LA 4T SIN VÍNCULOS CON LAS DEMANDAS INSTITUYENTES DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

A casi cinco años del mandato de Andrés Manuel López Obrador la oposición política, entendida como los partidos políticos en el Congreso de la Unión, sumados a una abigarrada configuración de organismos civiles y de incipientes movimientos sociales de claro tinte electoral, no logran desprenderse del dilema partido–movimiento y partido–maquinaria electoral, pues, en su gran mayoría, los partidos instituidos siguen siendo ajenos a las demandas de justicia y equidad que sostienen los diversos movimientos sociales. La oposición política no logra establecer contrapesos a las decisiones del Ejecutivo, y la mayoría legislativa de Morena en el Congreso de la Unión permite la aprobación y el impulso de una agenda legislativa marcada desde el proyecto de la 4T; así se difumina el contrapeso que en teoría representa el Poder Legislativo en un sistema de gobierno del tipo presidencial, sin que aparezca un campo propicio para las prácticas instituyentes que impulsan los movimientos sociales.

Si bien la alternancia de un partido político distinto al de los gobiernos previos significa una señal democrática, los desafíos que encuentra el actual gobierno federal se siguen enmarcando en un régimen político partidocrático. No obstante, las mayorías logradas por Morena en la Presidencia de la República, en el Congreso de la Unión y en los estados, hay un marco de desprestigio, desconfianza y desapego frente a los partidos políticos, sobre todo los de la oposición. Si bien el ejercicio de gobierno que algunos caracterizan como populista, muestra un distanciamiento entre el gobierno del pueblo y las políticas de pueblo o los pueblos en movimiento que impulsan prácticas instituyentes.

La discusión y el impulso de temas legislativos que tienden a modificar la Constitución o que implican una tensión constitucional es evidencia de la desarticulación de la oposición política y de control sobre el grupo parlamentario ejercido por el presidente. Ejemplo de ello se encuentra en la Guardia Nacional, cuerpo de seguridad que, desde su presentación, llevó a una controversia entre los legisladores, la cual sigue vigente, ahora por su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) —lo que terminaría por volver al punto de inicio: la militarización de la seguridad pública.

Los partidos políticos que en otro momento encabezaron el gobierno federal continúan con su desgaste, derivado de la crisis sistémica que aún está sufriendo el país. La más reciente derivada de la pandemia del covid-19, a la que se puede incluir la inseguridad con el terrible problema de personas desaparecidas, la desigualdad económica y las dificultades con el sistema educativo y científico.

El debilitamiento y la crisis de legitimidad de la oposición política hace evidente que no se encuentran coincidencias para hacer frente al gobierno federal (García, 2021). Sin embargo, no existe una ‘oposición social’, pues no hay acuerdo sobre la interfaz entre la lucha social y la lucha electoral ni tampoco se comparte la caracterización de las crisis que se sufren en este país, ni las consecuencias que se derivan hacia la conformación de comunidades políticas de pertenencia.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL INTERREGNO DEL PODER

Aunque existe una amplia gama de convergencia y de coordinación nacional e incluso global entre las demandas temáticas o sectoriales de los movimientos sociales, ello no se traduce, mecánicamente, en un programa político antisistémico o anticapitalista, o en un programa posneoliberal. Persiste la diversidad de alcances y resultados programáticos de los movimientos sociales. Sin embargo, resta por hacer un análisis que destaque la potencial influencia del fragmento sobre la totalidad (política del fragmento de Walter Benjamin⁴), el nuevo materialismo que contempla la capacidad de agencia de los seres vivos y no vivos, el poder de la naturaleza y las prácticas de ensamblaje social que pueden encauzar a los movimientos sociales (Latour, 2021) hacia la conformación de comunidades políticas de pertenencia. Es necesaria una reflexión de esta magnitud para avanzar en la identificación del carácter anticapitalista, anticolonial, antipatriarcal y antirracista que se prefigura en agendas de poder de los movimientos sociales.

El gobierno de la 4T no enfrenta estallidos sociales relativos a los programas de austeridad impuestos por la “Trinidad del (mal)Desarrollo”, como los habidos durante 2019 en varios países latinoamericanos y caribeños (Bello, 2021), que giraron en torno de la carestía de energéticos, la privatización y liberalización financiera que impacta educación, salud, pensiones y seguridad social. Tampoco se ve afectado por movimientos sociales altermundistas que actúan alrededor de la deuda externa, como Jubileo 2000 o ATTAC —lo que hubo fue una campaña reciente del PT: “suspensión del pago de la deuda pública ¡ya!”—, ni fue afectado por movimientos antisistémicos u opositores políticos duraderos durante la pandemia.

La agenda global ambiental —biodiversidad, sustentabilidad, contra la contaminación, lucha por el agua, contra el impacto minero, las represas e incluso contra el mal uso de las energías renovables— en la lucha por justicia socioambiental (Martínez Alier, 2021)⁵ sigue generando movimientos sociales que actúan al margen y a pesar de Morena. El neoextractivismo, talón de Aquiles de los gobiernos progresistas, es cuestionado por cientos de movimientos socioambientales locales, arraigados en México, que ensamblan sus luchas a escala nacional y global. Muestra de ello son el Tribunal Internacional del Agua, las movilizaciones semanales de Fridays for Future —Greta Thunberg— en varias ciudades mexicanas, o el movimiento Cambiemos el Sistema No el Clima, que demanda un decreto de Urgencia Climática para la Ciudad de México.

La tabla 10.1 clasifica las luchas por la justicia ambiental en México, vigentes en 2023; se registran 204 conflictos que, por su tipología, se ubican predominantemente en torno de la minería y actividades extractivas (43), la gestión del agua (42) y conflictos de matriz energética (31). Si se observa la intensidad de los conflictos destacan aquellos que tienen una intensidad media (108/204), son movimientos sociales que expresan su resistencia en la calle, sin que ello detone una respuesta política por parte del estado. Mientras que los conflictos de alta intensidad (68/204) muestran un paso hacia lo político en la confrontación de las políticas de estado mediante luchas contra la comunidad política instituida.

4. En el sentido que la entiende Gallegos (2019), “la política del fragmento (entendida como una mirada que se opone a las totalizaciones y resalta lo microscópico y las resistencias), la subversión del texto tradicional, comprendido como escritura continua, ordenada y homogénea, y la constelación como espacio crítico de ideas, saberes y prácticas...”.
5. El mapa de conflictos por la justicia ambiental en México está disponible en EJAtlas: <https://ejatlas.org>

TABLA 10.1 TIPO E INTENSIDAD DE CONFLICTOS POR LA JUSTICIA AMBIENTAL

Tipo de conflicto	Cantidad
Biodiversidad y conservación	7
Biomasa y conflictos por la tierra (gestión forestal, agrícola, pesquera y ganadera)	17
Combustibles fósiles y justicia climática energética	31
Conflictos industriales o servicios	5
Infraestructura y ambiente construido	32
Extracción de minerales y materiales de construcción	43
Nuclear	2
Turismo y recreación	8
Gestión de residuos	17
Gestión del agua	42
Total	204
Intensidad de conflictos	Cantidad
Alta (difusión, movilizaciones masivas, reacción de las fuerzas policiales, violencia y arrestos)	68
Latente (organización poco visible)	3
Baja (algunas organizaciones locales)	25
Media (movilización visible protestas callejeras)	108
Total	204

Hay una creciente articulación entre movimientos sociales vinculados con la defensa y promoción de derechos humanos y, particularmente, en contra de la desaparición forzada de personas, los feminicidios, la violencia contra las mujeres, que recoge continuidades, pero sobre todo que innova en el terreno del ensamblaje social organizado. Ante el desdibujamiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabezara el poeta Javier Sicilia, las Damas de Blanco (Isabel Wallace) o las denuncias de los hermanos LeBarón, hay un potente movimiento social que articula demandas dirigidas contra la injusticia y las políticas de seguridad pública del estado mexicano.

Se registran claroscuros en la Comisión de la Verdad sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero el movimiento que detonó este crimen de estado seguirá politizando la crítica al estado punitivo (Wacquant, 2001) a través de la movilización nacional organizada.

Un tema desafiante en torno de las redes sociales como movimientos sociales virtuales, se refiere a la estigmatización y persecución de periodistas, estudiosos/as de la comunicación política y organismos activistas en pro del derecho a la información, como es el caso de Artículo 19 y Signa_Lab. De acuerdo con Rossana Reguillo (2019):

[...] tras el análisis de una muestra de 98,000 tuits, se encontró que varios perfiles y cuentas forman parte de una “operación sofisticada” que incluye a “personas de carne y hueso” que el estudio denomina “maestros de ceremonia” y “un coro de bots que hacen un conjunto

de llamados para participar de esta tecnoartillería digital que levanta tendencias con una enorme velocidad”.

Una lucha por las redes sociales que también se da por parte de grupos opositores a la 4T y que encuentra vínculos internacionales ultrasofisticados en relación con redes internacionales conservadoras, como Cambridge Analytics, de Steve Bannon, y otras expresiones del mismo tipo que están vinculadas con la Internacional del Odio o la Internacional Reaccionaria. Estrategias para inculcar un sentido valorativo conservador en comunidades políticas de pertenencia tanto virtuales como de expresiones organizadas a escala internacional. El espacio de la Iberósfera que promueve el partido español Vox o la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC), reunida en ciudad de México el 2 y 3 de septiembre de 2022.

MOVIMIENTOS SOCIALES QUE DESAFÍAN A LA 4T

- Una expresión desafiante para comprender sentidos y alcances políticos de los Nuevos Movimientos Sociales la ofrece Geoffrey Pleyers (2018), coordinador del Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales. Bajo ese enfoque se puede abordar el caso de las Caravanas Migratorias, hipotéticamente el estallido social único que ha sido el más difícil de procesar por el gobierno de AMLO: relaciones con Estados Unidos, ciudadanías transnacionales, sacudimiento de derechos humanos de asilo y de refugio, contención político-militar de las migraciones, política de cooperación internacional, entre otros aspectos, son confrontados por organismos sociales efímeros que interpelan poderes locales y transnacionales con mediaciones políticas diversas.
- El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (Tirado, 2019), liderado por Javier Sicilia, respondió a la funesta guerra contra el narcotráfico. La importancia de este movimiento consiste en que fue un llamado a la justicia, opacada por los años de violencia en el combate al crimen organizado. Promovió la visibilización de las víctimas y su enfoque instituyente ha contribuido a la creación de las actuales Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Ley General de Víctimas, tanto en el plano federal como de los estados.
- El Movimiento por Nuestros Desparecidos en México (Rodríguez, 2016) es una organización que toma dimensiones nacionales durante lo que va del gobierno de AMLO; sigue la misma lógica de exponer los altos índices de violencia y sus consecuencias en la desaparición de personas desde 2006. Este movimiento está integrado por 35 colectivos, entre sus logros se encuentra la instrumentación y el impulso para que por medio de la reforma del artículo 73 constitucional en 2015 fuera discutida la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tomando en cuenta a las familias de los colectivos, la cual se promulgó en 2017 y fue reformada en 2022 para la creación del Centro Nacional de Identificación Humana con estrategias para la identificaciones de personas fallecidas sin identificar.
- La desaparición de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa en 2014 (Argüello, 2022) inaugura un movimiento con múltiples puntos de identificación que interpela a la comunidad política instituida y que contribuye a una configuración virtual de pertenencia. El cambio de gobierno trajo consigo el cuestionamiento de la llamada ‘verdad histórica’ publicitada por las autoridades responsables del sexenio 2012–2018 sobre

el caso de Ayotzinapa. El resultado de las investigaciones emprendidas por la Subsecretaría de Gobernación no satisfizo las demandas del Movimiento de los 43 Desaparecidos en lo relativo a las recomendaciones de relatores especiales de los organismos internacionales. Este movimiento se sostiene por una lógica de resistencia y rebeldía con la consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, que alimenta el carácter emancipador y por la verdad, la cual involucra la responsabilidad del Ejército y por lo tanto la del conjunto del estado.

- Las movilizaciones por el uso del agua son una realidad cada vez más preocupante (Herrera, 2022). Por un lado, se encuentran las dificultades técnicas en su disposición para uso público y por otro las concesiones para su uso industrial. Esta situación ha ocasionado malestar social sobre el acceso y usos del agua, lo que lleva a cuestionar el orden establecido institucional en disposición de este recurso por medio de una participación social alternativa que ha derivado en la unión y alianza de varias organizaciones, entre las que se encuentran el Movimiento Campesino contra el Proyecto Temascaltepec, el Ejército de Mujeres Zapatistas en Defensa del Agua, el Frente para la Defensa de los Derechos Humanos y Recursos Naturales del Pueblo Mazahua, el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) y la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA).
- La lucha social hídrica tiene un marco de conflicto global progresivo por el orden social del agua. Las concesiones del uso del agua ocurren en contubernio con el poder político y las élites empresariales, esta situación no es exclusiva de México, sino un conflicto de escala mundial que impacta en lo social-democrático y lo ecológico-ambiental.
- El movimiento contra la minería se ocupa de grandes luchas, desde las mejoras en la seguridad laboral hasta la explotación regulada de los recursos minerales. El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y el Consejo Maseual Altepetajpianij (Guardianes del Territorio) impulsan reformas a las leyes en materia de explotación de recursos minerales y naturales. Estas organizaciones evidencian las dificultades de los pueblos indígenas para participar en los procesos de consulta y de licitaciones en la materia, lo que es violatorio de acuerdos internacionales y de los derechos de los pueblos indígenas. Su lucha es constante para impedir que se instalen minas o para detener proyectos de extracción. Los proyectos de explotación minera tienden a un uso excesivo y contaminante del agua, así como provocan la erosión y deforestación.
- Son 26 de las 32 entidades federativas que permiten el matrimonio igualitario; un logro para la comunidad LGBTQI+. Sin embargo, persisten situaciones de violencia para esta comunidad, como los casos de violencia contra mujeres trans. De acuerdo con la asociación Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, AC, durante 2021 ocurrieron 78 muertes violentas de personas de la comunidad LGBTQI+ en México.

El Movimiento Feminista ha demostrado fortaleza y organización. Este movimiento tiene la singularidad de no tener una persona líder que encarne el movimiento, sino es resultado de una voz colectiva. Este movimiento integra diversos feminismos, es transgeneracional e incluyente. Su lucha es transversal, desde “romper el techo de cristal” que cobija la dominación patriarcal hasta dar la batalla por la justicia de las víctimas de feminicidios. El paro de mujeres de 2020 es símbolo del protagonismo de este movimiento en la práctica de sororidad y resiliencia. El movimiento feminista apunta a una comunidad política de pertenencia consolidada en México. Los movimientos feministas expresan una de las principales dificultades

del gobierno de la 4T para procesar las demandas provenientes de movimientos sociales autónomos. Si bien el feminismo mundial se configura por múltiples y muy heterogéneas posiciones políticas, Morena y el gobierno de la 4T no procesan institucionalmente las demandas relativas a la agenda antipatriarcal enarbolada.

En la interacción con Morena y con López Obrador las organizaciones que tienen un enfoque de izquierda social son de carácter instituyente, pues sus luchas están relacionadas con el impulso de leyes y normas novedosas que redunden en la protección y defensa del territorio, o en la reivindicación de derechos humanos o de ciudadanía. En su desempeño son competentes al mostrar capacidades técnicas y organizativas solventes, y son independientes de cara al gobierno (Hanagan, 1998). Cuando las demandas sociales rebasan las capacidades del orden instituido los movimientos resultan desafiantes al estado porque defienden la posesión del territorio y su organización social autónoma, o porque confrontan la relación perversa entre estado y gobierno, como es el caso de Ayotzinapa y los movimientos en contra de las desapariciones forzadas. Todos estos movimientos son coincidentes con el impulso de articulación de demandas en la lógica de las “redes de redes” (Hanagan, 1998).

Una acotación importante para la comprensión de los movimientos sociales vinculados con la promoción, defensa y ejercicio de los derechos humanos, entendidos como Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Autosustentables (DESCA) es su articulación práctica con organismos civiles que luchan, animan y le dan cuerpo al planteamiento de iniciativas o demandas frente al estado, y su incidencia en reformas legales y constitucionales, así como en procesos de educación popular. Además, hay una compleja interfaz entre las agendas locales y las agendas internacionales, que resuena en foros internacionales (Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional de Derechos Humanos, entre otras).

Es de resaltar que el ámbito de los derechos humanos es muy sensible frente a las tensiones entre lo instituyente y lo instituido, lo cual se plantea en tres narrativas: la del gobierno instituido, que encuadra su discurso en la ampliación de derechos de ciudadanía, con la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y en general políticas sociales en vivienda, educación, pensiones y seguridad social, que pretenden crear un piso “estructural” de aseguramiento de derechos humanos con justicia. Además, la 4T está financiando, “como nunca antes”, programas para la búsqueda de personas desaparecidas al otorgar el presupuesto necesario para la búsqueda de 40 mil personas desaparecidas e identificación de 26 mil cuerpos que permanecen en instalaciones forenses en todo el país. No obstante, el talón de Aquiles de la 4T en materia de derechos humanos se refiere a la militarización de la seguridad pública y la consiguiente violación de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.

En otro campo narrativo, que es de corte internacional, se enfrentan los organismos de Naciones Unidas con un discurso que reconoce esfuerzos del gobierno de AMLO para actuar en la defensa y promoción de los derechos humanos, y ciertos discursos de ONG especializadas en vigilar el minado campo en esa materia, cuyos informes son objetos polémicos por el riesgo de sesgos políticos que persiguen algunas de esas organizaciones internacionales. Un tercer discurso es instituyente, crítico e independiente del gobierno en turno; interpela al estado, recoge voces y planteamientos surgidos desde las personas y familiares de los afectados/as; cientos de organizaciones de larga data y de reciente creación forman una constelación de redes dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos —que,

además, tienen un enfoque integral transversal en temas como la tortura, el racismo, la discriminación y el enfoque de género.⁶

LA BÚSQUEDA DE UNA COMUNIDAD POLÍTICA DE PERTENENCIA AUTÓNOMA NO ESTADOCÉNTRICA

Una mención especial merece la idea de “pueblos en movimiento”, categoría propuesta por Zibechi (2022), en la que los pueblos organizados desafían al estado y al capital, resultado de acciones de despojo y extractivismo, de los bienes naturales y culturales productos del neoliberalismo. Aquí se inscriben el EZLN en Chiapas y el pueblo de Cherán Keri en Michoacán. Ambos pueblos desafían la organización estatal clásica, parten de otro modelo de democracia, protegen su territorio y luchan por su autonomía, encuentran otra forma de convivir con los bienes naturales y generan otras dinámicas sociales. Lo anterior tiene una interacción particular, ya que actúan con el estado mexicano que funciona bajo un esquema institucional e internacional, lo que da muestra de la posibilidad de otras perspectivas críticas, en lo político, económico y social.

En el mundo perseveran diferentes estallidos sociales que responden a agendas críticas del capitalismo financiarizado de la economía digital, de la inteligencia artificial, la computación cuántica, que sostienen al capitalismo de plataformas (GAMFAT, R. Boyer), al complejo químico farmacéutico y militar-industrial, que implica la re-materialización de la economía y su correlato el despojo neoextractivista (Harvey, 2007). Más allá de la politización de los movimientos sociales en la arena nacional está el contexto internacional: el impacto de la guerra de Ucrania sobre la transición energética, la circulación y producción de alimentos, las cadenas globales de suministro, particularmente los microprocesadores, los desplazamientos forzados internos y externos de población; todo lo cual aviva el debate entre autoritarismo y democracia. Es nuestra hipótesis que los movimientos sociales con el mayor potencial social transformador se encuentran entre aquellos ensamblajes sociales que están fundando comunidades políticas autónomas de pertenencia no estadocéntricas que son capaces de resistir y superar las recurrentes y agudizadas crisis sistémicas *globales* del capitalismo.

- La experiencia zapatista de los Caracoles representa luchas y resistencias encaminadas hacia la autonomía comunitaria indígena cuyo objetivo es la supresión del estado.⁷ Ello implica la contraposición frente al estado nacional y la democracia liberal, la defensa de la interculturalidad y los derechos culturales a la diferencia. Su comunidad política de pertenencia es la autonomía indígena desde la que se reivindica “otra política”, desmarcada de procesos electorales institucionales, así como de cualquier reforma —adecuación— o adaptación del estado mexicano. Tal comunidad tiene proyección global sin ataduras a un programa internacional preestablecido, pero que tiene en común ciertos principios como

6. Otro nodo conflictivo es el del carácter autónomo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que no ha logrado constituir puentes de diálogo eficaces con los movimientos sociales especializados en ese ámbito. La titular de la CNDH envió al Senado una iniciativa de ley para crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo el 1 de enero de 2023, que propone un cambio mayor que ‘coloque en el centro a las víctimas y quienes están en riesgo de algo serio’ y haga de la defensa de los derechos humanos una auténtica política de estado.

7. En 2019, en el contexto del gobierno de AMLO, el EZLN crea 11 nuevos Caracoles y 16 Municipios Autónomos Rebeldes. Los nuevos Caracoles se suman a los cinco que operan, desde hace 15 años, en Chiapas; los 16 nuevos Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (Marez) pasan de sumar 27 a 43. Un mapa con los territorios autónomos zapatistas se puede consultar en <https://radiozapatista.org/?p=43177>

la autogestión, la democracia directa, el confederalismo democrático y la autodefensa armada (González Casanova, 2006). Intuyo que está en vías de conformarse la “Internacional Rebelde”⁸ en comunicación con experiencias mapuches del wallmapu, pueblos nasa del Cauca colombiano, de la Rojava kurda, entre otras. Hay experiencias comunitarias como la de Cherán K’Ari que comparte luchas en contra y desde dentro del estado.

- Desde una perspectiva diferente, aunque con expectativas de mayor convergencia político-organizativa, está el “otro zapatismo” (Toledo, 2019), que cuenta con una base social considerable de más de 500 grupos organizados actuantes en la mayoría de las zonas indígenas del país. Su organización está soportada en grupos indígenas y pueblos afectados por conflictos socioambientales que interpelan al estado (en contra y desde dentro) en sus proyectos comunitarios.⁹ Esta convergencia se propone reformas constitucionales a través de alianzas y coaliciones que han tenido diferencias con el zapatismo. Desde 1994 la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA) se ha planteado reformas constitucionales apegadas a los Acuerdos de San Andrés. En 1997 la ANIPA se constituyó en Asociación Política Nacional. En 2021 la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (Aldea) impulsa una reforma del estado que pueda incidir en la calidad democrática de la representación y en el impulso de un estado que reconozca el carácter plurinacional de los pueblos (Serapaz, 2020).

- Las autodefensas y policías comunitarias, extendidas en más de la mitad del territorio nacional hasta 2017 (Alonso, 2018), en contadas ocasiones superaron el origen político-militar de su organización. La concepción militarizada de la seguridad, por parte del gobierno, fue incapaz de reconocer el valor político de las autodefensas y policías comunitarias. Sin embargo, a pesar de su criminalización, hay un resurgimiento de estas formas autoorganizadas en apoyo de autonomías regionales, como fue el caso de “Los Machetes”, que reunió a 85 comunidades en Pantelhó, Chiapas, en julio de 2021 (El País, 2021).

Diversos movimientos altermundistas encierran potenciales reivindicaciones autonómicas en el plano global, que interpelan la gobernanza multilateral, el orden mundial hegemónico y los procesos de integración supranacional regional. Entre el 1 y el 6 de mayo de 2022 México fue la sede del Foro Social Mundial (<https://wsf2022.org/>), además, varios grupos organizados se oponen al libre comercio (RMALC, Cumbres de los Pueblos, Alianza Social Continental), al neoextractivismo (Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Mapder) y otros grupos buscan incidir en la fuerza autonómica frente a los Acuerdos de París y los ODS de Naciones Unidas.

IDEAS PARA REFLEXIONAR

En 2018 las circunstancias políticas dieron un giro trascendental. Por primera vez en la historia del país llegaba al Gobierno Federal un partido político con una agenda de centroizquierda con un enfoque distinto a los tradicionales por sus nexos entre partido y movimientos sociales. Este escenario generó expectativas en relación con las luchas de los movimientos sociales y las autonomías, basadas en un proyecto distinto del funcionamiento del estado mexicano.

8. Al respecto se puede consultar un mapa de experiencias de la Internacional Rebelde y sus epicentros geopolíticos en: <https://radiozapatista.org/?p=43177>

9. Véanse las figuras 1 y 2 en Toledo, 2019: https://www.ecologiapolitica.info/wp-content/uploads/2019/10/018_Toledo_2000.pdf

La relación entre populismo y progresismo ha significado que, en el gobierno de la 4T, el partido actúe como maquinaria electoral al servicio pragmático de la gobernanza instituida, alejado de los movimientos sociales con los que se alió en el pasado y que es reacio a negociar con los movimientos sociales emergentes. Las tensiones entre movimiento social, partido y gobierno sesgan lo político hacia el campo gubernamental instituido limitando, así, el potencial instituyente presentado por nuevos ensamblajes sociales que afrontan la crisis global y sistémica con ‘otros sentidos de pertenencia’ en sus comunidades políticas.

El potencial transformador de los movimientos sociales se debate entre luchar desde dentro y contra el estado, *versus* su tránsito hacia una comunidad política de pertenencia autónoma no estado-centrada. En ambos casos se combinan políticas de identidad, con hegemonía cultural; de reconocimiento, con demandas materializadas y clasistas transversales, y políticas de pueblo, de ‘pueblos en movimiento’ de base étnica, afrodescendiente, descolonizadora y antipatriarcal. No obstante, hay diferencias políticas que ponen a prueba la eficacia estratégica para la transformación social con paz, justicia y equidad.

Así, se amplía la brecha entre tres formatos de pertenencia: el régimen progresista populista instituido; la diversa constelación de comunidades políticas de pertenencia que actúan en escalas interconectadas entre lo local, lo regional subnacional, lo nacional y lo supranacional-internacional-global, pero en interfaces con lo instituido —elecciones locales y nacionales, interpelación a las instituciones multilaterales y cuestionamientos al sistema de Naciones Unidas—; y, tercero, formatos de integración comunitaria autónoma sin estado.

El tránsito de los movimientos sociales hacia la política y lo político —lo político anida en los conflictos relativos a la convivencia social, mientras que la política es propia de la vida del estado— da visibilidad a los ensamblajes sociopolíticos que construyen y permiten generar cambios radicales de distinta envergadura y escala que transforman la realidad social, política y económica. Permanece, sin embargo, la definición de los alcances que se plantean esas tres comunidades políticas de pertenencia: la progresista populista instituida tiene un discurso antineoliberal, aunque contradictorio con su política económica neoliberal; la que interpela la institucionalidad del poder constituido, es antisistémica, abierta a reformas graduales, y la autónoma y comunitaria que plantea un discurso anticapitalista.

Las luchas de carácter instituyente se producen dentro de una nueva performatividad que tiene un nuevo horizonte civilizatorio respecto de la naturaleza, defienden el territorio social, a veces en su dimensión autónoma, contra los proyectos geopolíticos de desposesión, gubernamentales y privados; cuestionan el comportamiento de un estado criminal que es débil e incluso omiso ante los homicidios y ante las cifras sin precedentes de personas forzosamente desaparecidas. No obstante, se dividen las posiciones político-ideológicas de los movimientos sociales respecto de su participación en la democracia institucional.

Además, las bases de sustentación de los movimientos sociales están en disputa por parte de expresiones ligadas con la extrema derecha conservadora. Aunque tal disputa está por ahora acotada a movimientos que se desenvuelven en el ámbito electoral de la democracia representativa, hay políticas de identidad y reconocimiento que pretenden incidir en reivindicaciones materiales que se pueden agrupar dentro de un populismo nacionalista, supremacista blanco, patriarcal y con vínculos internacionales. Una de esas expresiones destituyentes es el Frente Nacional AntiAMLO (Frena), la agrupación que confronta al proyecto de la 4T y a la figura presidencial, que tuvo un momento de relevancia al ocupar el Zócalo de la Ciudad de México en 2020 —movilización que terminó por perder legitimidad y quedar en la mera práctica performática.

Las movilizaciones en defensa del INE en 2022 no se constituyen en movimientos sociales que tengan poder instituyente. Se acotan a la lucha por el poder instituido, particularmente en materia electoral, aunque están larvadas otras demandas de alcance sistémico relacionadas con políticas de reconocimiento sobre los Organismos Públicos Autónomos Constitucionales, la relación entre algunos sectores organizados de la sociedad civil y el gobierno de la 4T, y demandas contenidas contra la inseguridad, la militarización de la seguridad pública, o sobre la gestión gubernamental de la economía, de la política social —calificada de populista— y de los poderes metaconstitucionales del presidencialismo mexicano. Sin embargo, el protagonismo de partidos opositores al gobierno encauzó la lucha por la calle, llevándola al fortalecimiento de la partidocracia sin que la participación social haya sacudido al ámbito de la comunidad política progresista populista de pertenencia instituida.

A diferencia de los estallidos sociales de 2019 en Latinoamérica y el Caribe, que desembocaron en cuestionamientos antisistémicos del régimen de acumulación capitalista, no aparece algo similar en la actualidad mexicana. La lucha por la calle no desemboca en referencias políticas de pertenencia; en todo caso, la defensa de los territorios y la lucha por la justicia (socio)ambiental conduce hacia la politización de los movimientos sociales que interpelan al estado y al régimen capitalista. Desde ahí se articula un sentido compartido de pertenencia frente al orden instituido, donde permanecen experiencias comunitarias de ensamblaje social comunitario. Comunidades políticas de pertenencia que intentan una vida integral, entre la naturaleza, sus bienes, la vida social y un proyecto de gobernabilidad autónoma y popular, que está más allá del debate sobre regímenes populistas.

REFERENCIAS

- Alonso, C. (2018). *Movimientos recientes de autodefensas y policías comunitarias en México*. Universidad de Guadalajara.
- Alonso Muñoz, R. (Coord.). (2022). *La 4T bajo la lupa: balance preliminar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 2018–2021*. Universidad Iberoamericana Puebla–Departamento de Ciencias Sociales. Cuadernos de investigación, 22.
- Amnistía Internacional. (2022, julio–septiembre). *Panorama actual de los temas prioritarios para AI en México*. Amnistía Internacional. <https://amnistia.org.mx/contenido/wp-content/uploads/2022/12/INFORME-TRIMESTRAL-3-AIMEX-2022.pdf>
- Argüello, L. (2022). Desaparición forzada y estigmatización comunitaria: movilización y solidaridad alrededor del caso Ayotzinapa (2014–2019). *Mexican Studies/Estudios Mexicanos*, 38(2), 300–330. <https://doi.org/10.1525/msem.2022.38.2.300>
- Barrón, Ó. (2022, 23 de marzo). Estos son los artistas que lanzaron videos contra el Tren Maya de AMLO. *El Debate*. <https://www.debate.com.mx/politica/Estos-son-los-artistas-que-lanzaron-videos-contr-el-Tren-Maya-de-AMLO-20220323-0132.html>
- Becerril, A. (2023, 22 de enero). Prioritarios para Morena en el Senado, Ley General de Aguas y despenalizar el cannabis. *La Jornada*.
- Bello, W. (2021, 2 de mayo). 1995–2021: Auge y caída del multilateralismo. *Sin Permiso*. <https://www.sinpermiso.info/textos/1995-2021-auge-y-caida-del-multilateralismo>
- Carrillo, J. (2022, 14 de marzo). *Reforma eléctrica: la CFE contra la CFE*. Centro de Investigación en Política Pública. Instituto Mexicano para la Competitividad. <https://imco.org.mx/reforma-electrica-la-cfe-contr-la-cfe/>

- Cruz Rueda, E. (2020, 1 de abril). Pueblos indígenas de México contra el Tren Maya. Debates Indígenas. <https://debatesindigenas.org/notas/34-pueblos-contra-el-tren-maya.html>
- El Financiero. (2022, 4 de marzo). ¿Quiénes son los famosos que se han pronunciado contra el tren maya? *El Financiero*. <https://www.elfinanciero.com.mx/espectaculos/2022/03/24/quienes-son-los-famosos-que-se-han-pronunciado-contra-el-tren-maya/>
- El País. (2021, 19 de julio). Autodefensas mexicanas. Así es El Machete, el nuevo grupo de autodefensa en Chiapas. *El País*. https://elpais.com/elpais/2021/07/19/album/1626719205_300598.html
- Forbes Staff. (2022). La nacionalización del litio en México comienza con múltiples interrogantes. *Forbes*. <https://forbes.cl/negocios/2022-04-25/nacionalizacion-litio-mexico>
- Gallegos, E. (2019). Políticas del fragmento y la resistencia. Pliegues de la topohistoriografía crítica en Walter Benjamin. En A. A. Viveros, L. Carballido Coria, J. Galindo y F. Vázquez Vela (Eds.), *Modernización y espacio. Imaginarios, ordenamientos y prácticas* (pp. 131-158). UAM/Universidad del Rosario.
- Garavito González, L. (2012). La movilización social por el agua en la cuenca de México. Una perspectiva desde las organizaciones sociales. *Territorios*, (26), 35-62.
- González Casanova, P. (2006, 7 de enero). “Los caracoles” zapatistas: Redes de resistencia y autonomía (Ensayo de interpretación). *La Haine*. <https://clajadep.lahaine.org/articulo.php?p=5864&more=1&c=1>
- Hanagan, M. (1998). Incorporation, Disengagement, and Opportunities. A Long View. En M. Giugni, D. McAdam y Ch. Tilly (Eds.), *From Contention to Democracy* (pp. 3-30). Rowman & Littlefield.
- Harvey, D. (2007). *Espacios del capital. Hacia una geografía crítica*. Akal.
- Honneth, A. (1997). *La lucha por el reconocimiento: por una gramática moral de los conflictos sociales*. Crítica.
- Huesca, L., Ordóñez, G. y Sandoval, S. (2020). *Los retos de la política social en el sexenio de la Cuarta Transformación*. El Colegio de la Frontera Norte/Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo.
- Infobae. (2023, 18 de enero). Refinería de Dos Bocas aún no refina petróleo a 200 días de su inauguración. *Infobae*.
- Jaramillo-Molina, M. (2022). “Primero los menos pobres”: Política social, desigualdad y pobreza durante el sexenio de López Obrador. *Análisis Plural* (1), 1-16.
- Latour, B. (2021). *After Lockdown: A Metamorphosis*. Polity Press.
- Linsalata, L. y Navarro Trujillo, M. L. (2020). Más allá de la retórica anti-neoliberal: ofensiva extractivista y megaproyectos en tiempos de la Cuarta Transformación. *Bajo el Volcán*, 1(2 digital), 329-366. <http://www.apps.buap.mx/ojs3/index.php/bevol/article/view/1604/1476>
- Luna Hernández, F., González Contreras, S. y Modonesi, M. (2018). Las organizaciones sociales frente a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y Morena en 2018. *Revista Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales*, 3(1), 28-47. <http://www.revistamovimientos.mx/ojs/index.php/movimientos/article/view/85>
- Martínez Alier, J. (2021). *El ecologismo de los pobres: Conflictos ambientales y lenguajes de valoración*. Icaria.
- Modonesi, M. (2021, junio). Elecciones en México: el obradorismo en su laberinto. *Nueva Sociedad*, Opinión. <https://nuso.org/articulo/lopez-obrador-mexico/>

- Monsiváis-Carrillo, A. (2019). Innovación institucional para la rendición de cuentas: el Sistema Nacional Anticorrupción en México. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, (65), 51-69. <https://doi.org/10.17141/iconos.65.2019.3793>
- Núñez, E. (2023, 29 de enero). *Servidores de la nación, la maquinaria de relojería*. Pie de Página, <https://piedepagina.mx/servidores-de-la-nacion-la-maquinaria-de-relojeria/>
- Olivares, E., y Jiménez, N. (2022, 2 de agosto). Fin de concesiones de agua a industrias del norte del país. *La Jornada*.
- ONU Hábitat. (2020, 7 de agosto). *Voces de los pueblos indígenas y el Tren Maya*. ONU Habitat por un mejor futuro urbano. <https://onuhabitat.org.mx/index.php/voces-de-los-pueblos-indigenas-y-el-tren-maya>
- Ortega, A. (2020, 19 de enero). Policías, constructores y sembradores, los “nuevos” roles del ejército de AMLO. *Expansión Política*. <https://politica.expansion.mx/mexico/2020/01/19/policias-constructores-y-sembradores-los-nuevos-roles-del-ejercito-con-amlo>
- Otero, G., Gürcan, E. C., y Mackinlay, H. (2020). Social movements and the state in the post-neoliberal era. En H. Veltmeyer y E. Lau (Eds.), *Buen Vivir and the Challenges to Capitalism in Latin America*. Routledge.
- Pleyers, G. (2018). *Movimientos sociales en el siglo XXI*. CLACSO.
- Presidencia de la República. (2022, 21 de enero). El pueblo de México ya es dueño de la refinería Deer Park, anuncia presidente López Obrador. <https://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-pueblo-de-mexico-ya-es-dueno-de-la-refineria-deer-park-anuncia-presidente-lopez-obrador>
- Presidencia de la República. (2020, 31 de diciembre). Decreto por el que se establece [...] sustituir gradualmente el uso [...] de la sustancia química denominada glifosato... *Diario Oficial de la Federación*. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609365&fecha=31/12/2020#gsc.tab=0
- Reguillo, R. (2019, 16 de marzo). #RedAMLOVE: la ‘operación sofisticada’ que defiende a AMLO en redes sociales, según Signa Lab. *CNN*. <https://edition.cnn.com/videos/spanish/2019/03/16/redamlove-amlo-bots-4t-bots-redes-sociales-iteso-reguillo-cruz-intvw-perspectivas-mexicanos.cnn>
- Rodríguez, T. (2016). El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, *Discurso & Sociedad*, 10(4), 808-820. [http://www.dissoc.org/ediciones/v10n04/DS10\(4\)Rodriguez.html](http://www.dissoc.org/ediciones/v10n04/DS10(4)Rodriguez.html)
- Romero Herrera, C. (2022). Mirar la entraña: conflictos por el agua en México. *Espacios Públicos*, 22(54), 161-164.
- Rosanvallon, P. (2007). *La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza*. Manantial.
- Saldaña, H. (2022, 13 de mayo). En visita a Jalisco, AMLO garantiza casi siete mil MDP para la Presa el Zapotillo. Canal 44. <https://udgtv.com/noticias/visita-jalisco-amlo-garantiza-casi-siete-mil-mdp-presa-zapotillo-l4/>
- Secretaría de Relaciones Exteriores. (2023, 9 de enero). Cumbre de Líderes de América del Norte 2021-2022. Hoja informativa de logros de la IX CLAN. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/sre/documentos/cumbre-de-lideres-de-america-del-norte-323236>
- Serapaz, AC. (2020, 24 de septiembre). Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea). <https://serapaz.org.mx/alianza-por-la-libre-determinacion-y-la-autonomia-aldea/>
- Tirado, R. (2019). Javier Sicilia como celebridad trágica y los performances del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 64(237), 95-118. <https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2019.237.65073>

- Toledo, V. (1999). El otro zapatismo. Luchas indígenas de inspiración ecológica en México. *Ecología política*, (18), 11-22.
- Transparencia Mexicana. (2023, 30 de enero). Se estanca México en percepción de la corrupción: transparencia Mexicana. Transparencia Mexicana: <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/mex>
- Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index. Transparency International: <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/mex>
- Tzuc, E. (2022, 13 de abril). Expertos de la ONU piden a México sacar a militares de la calle, AMLO revira: “no están bien informados”. A dónde van los desaparecidos. <https://adondevanlosdesaparecidos.org/2022/04/13/expertos-de-la-onu-piden-a-mexico-sacar-a-militares-de-la-calle-amlo-revira-no-estan-bien-informados/>
- Wacquant, L. (2001). *Los condenados de la ciudad. Gueto, periferias y estado*. Siglo XXI Editores.
- Zibechi, R. (2022). *Mundos otros y pueblos en movimiento. Debates sobre anticolonialismo y transición en América Latina*. Libertad Bajo Palabra.